

PROGRESAR: Subsidio no es inclusión

Lic. Eduardo P. Amadeo

Frente Renovador.

El reciente lanzamiento del programa Progresar, que a través de una transferencia monetaria busca asegurar la integración de los jóvenes que no estudian ni trabajan (“ni-ni”), es una oportunidad para abrir una discusión profunda sobre la esencia de las políticas sociales, tanto en los aspectos éticos cuanto en su capacidad para efectivamente modificar las condiciones de exclusión de estas poblaciones.

Tarde -como sucedió con la Asignación Universal por Hijo (AUH)- el Gobierno reconoce el drama social que sufren los jóvenes excluidos, quienes se han convertido en el sector más crítico de la pobreza en nuestro país. Abandono escolar y baja calidad educativa, embarazo adolescente, desocupación y adicciones forman un círculo de hierro del que muchos no pueden escapar y que sigue reproduciendo la pobreza entre generaciones.

Ninguno de estos eslabones es la responsabilidad de nuestros jóvenes. Desde su historia familiar, pasando por la baja calidad de la escuela pública, los *ghettos* urbanos en los que viven, la falta de políticas de salud sexual y la carencia de herramientas laborales, su vida está determinada desde la cuna. El aumento de los Ni-Ni en estos años muestra inconsciencia y ausencia del Estado sobre este problema dramático.

Frente a este complejísimo problema, el Progresar intenta generar un incentivo a uno de los eslabones de la cadena de la exclusión: la educación.

Pero un subsidio no asegura la inclusión. Los jóvenes no abandonan la escuela sólo por razones económicas, sino también por causas muy complejas que van desde carencias nutricionales y afectivas de la infancia hasta la falta de incentivos en su medio social. Ninguna de estas carencias puede ser solucionada con un subsidio económico tardío.

Se trata de una población que Ernesto Kritz llamó “los inempleables”; y que otros autores han analizado desde la perspectiva de su “educabilidad”, es decir desde su capacidad para integrar a sus vidas los elementos que brinda la escuela.

Asumir que una suma de dinero mensual va a ser suficiente como para superar el determinismo generado por una historia de vida, es cuando menos ingenuo; pero además muestra una grave carencia en el análisis de las múltiples razones de la exclusión.

¿Podemos pensar acaso que el dinero por si solo puede alcanzar para recuperar las pérdidas generadas por la pobre nutrición o por los impactos que produce la violencia familiar que se remonta -como lo demuestran incontables estudios científicos- aún al vientre materno?

Por todo ello es que los programas sociales que han tenido éxito con esta difícil población avanzan hasta el punto de contar con tutorías que siguen cuerpo a cuerpo a los jóvenes que ingresan o reingresan a la escuela para que ellos puedan superar tales restricciones con el apoyo de especialistas que los acompañan o con docentes especialmente entrenados.

Nuestra escuela no demuestra estar preparada para este enorme desafío. Varios estudios demuestran que desde un rechazo al diferente; hasta técnicas pedagógicas inadecuadas, la escuela tiene poca tolerancia y menor tecnología para los casos “difíciles”, que se cuentan por cientos de miles.

Si estas previsiones no se toman, lo que puede suceder es que el sistema sufra un gravísimo *stress* al recibir una demanda compleja para la que no está preparada. Las evaluaciones disponibles muestran que ya se fracasa con las poblaciones actuales. Imaginemos lo que puede suceder con un aumento tan importante de quienes quieren volver a la escuela.

Por ello es que si el Progresar va a servir para incluir a 1 millón de jóvenes, debe ser parte de un programa más amplio que incluya tutorías educativas y afectivas y diálogo con los padres, un seguimiento cuidadoso del rendimiento escolar de los chicos y una evaluación rigurosa del impacto del Programa sobre sus vidas.

De no producirse esta adecuación, se corre el peligro que si los jóvenes no pueden completar su educación por sus carencias heredadas y pierden el subsidio; o si lo siguen cobrando a pesar de no concurrir a la escuela, seguirán siendo excluidos y agregaran una frustración más a las muchas que ya tienen. Imaginemos un joven que se encuentra de golpe con ese dinero en el bolsillo; y que luego de un tiempo- porque su vida está marcada por su historia- lo pierde por no poder sostenerse en la escuela, a pesar del incentivo económico.

Pero además, el Progresar vuelve a repetir el vicio de todos los programas sociales de los últimos años: la inexistencia de herramientas que permitan evaluar científicamente su impacto sobre la vida de los beneficiarios. No existe un sólo programa social oficial que haya sido evaluado con un mínimo de seriedad. El "Manos a la obra" y el "Trabajar" se han convertido en fuentes de clientelismo que derrochan centenas de millones de pesos sin que pueda saberse si han mejorado en algo la vida de sus "beneficiarios".

Uno de los peores vicios del clientelismo o de los programas sociales parciales es que - como lo demuestra la experiencia argentina- subsidio no es siempre inclusión. La AUH ha mejorado significativamente el acceso a bienes básicos por parte de muchas familias, pero no ha logrado resolver muchas de las condiciones de vida que les impiden acceder a la movilidad social.

Ya hemos mencionado lo que le sucede a los jóvenes, a lo que se puede agregar el deterioro general del acceso a los bienes públicos (salud, transporte, seguridad, justicia) y privados (empleo de calidad) que relativiza el valor de la transferencia monetaria para tener una mejor calidad de vida.

Una buena política social no consiste sólo en subsidios. Una buena política social es integral en el más pleno sentido de la palabra. Debe tomar en cuenta todo lo que decide la vida de quienes están excluidos y actuar en consecuencia. El deterioro de la familia tradicional, la masividad de hogares con jefatura femenina agregan abandono y limitaciones al afecto que los chicos necesitan para desarrollarse en la vida; y es esencial que desde el Estado se actúe sobre estas variables; para poner solo uno de los múltiples ejemplos que deben ser considerados.

Una buena política social es una mirada integral sobre la dignidad de las personas que quiere potenciar sus capacidades y no someterlas a la política. Es una buena administración que sabe evaluar impacto y corregirse cuando es necesario. Es un acuerdo político que permite la continuidad de las buenas acciones en el tiempo. Finalmente -pero no menos importante- es un marco de política económica que asegura estabilidad y trabajo a los que los necesitan.

Por todo ello es que debemos reflexionar seriamente acerca de este nuevo Plan; y tomarlo como una oportunidad para que no se sigan repitiendo los múltiples errores que han hechos que persista la exclusión de centenas de miles de jóvenes argentinos.